



74

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA
Tunja, nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo

Demandante: Libardo Alvarado Romero

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Radicado: 15001 33 33 007 **2018 00162 00**

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el mandamiento de pago promovido por el señor Libardo Alvarado Romero contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

I. Antecedentes

La parte demandante solicitó se libre mandamiento de pago contra la UGPP y a favor del señor Libardo Alvarado Romero, por los siguientes conceptos¹:

*“b) Por la suma de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$9.649.987)**, por concepto de **INTERESES MORATORIOS COMERCIALES**, causados sobre la suma de \$50.520.675 (monto que por mesadas atrasadas indexadas a la fecha de ejecutoria de la sentencia adeuda la entidad), a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, al 12 de agosto de 2013, y desde el 19 de noviembre de 2013, hasta el 31 de enero de 2014 (fecha en que la entidad pagó)*

*c) Por las sumas que resulten de la **INDEXACIÓN** de los intereses moratorios que se causen sobre el valor de \$9.649.987, desde el día siguiente a que la entidad ejecutada pagó (01 de febrero de 2014) hasta que se cumpla con la totalidad de la obligación por la entidad ejecutada.”*

Así mismo, pidió se condene en costas y agencias en derecho.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

- Competencia

En los términos de los artículos 104 numeral 6 y 297 del CPACA, este Juzgado es competente para conocer de la presente ejecución, toda vez que se demanda por vía ejecutiva el valor de los intereses moratorios derivados de la condena contenida en la sentencia de 23 de septiembre de 2010, proferida por este Despacho judicial en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°

¹ Ver folio 4.

15001 3331 004 2009 000231 00, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante providencia de 29 de noviembre de 2012 y que cobró ejecutoria el 21 de julio de 2011 (fl. 24)

De otro lado, en virtud del numeral 7 del artículo 155 *ejusdem*, este Despacho es competente para conocer de esta demanda en razón de la cuantía, al encontrar que la misma no supera la suma de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigente (f. 6).

- **Caducidad**

La demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal que corresponde de conformidad al artículo 164 numeral 2, literal K del CPACA, por cuanto la sentencia cobró ejecutoria el **12 de febrero de 2013** (fl. 7), y una vez transcurrieron los dieciocho (18) meses de que trata el art 177 del CCA, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **25 de septiembre de 2018** (fl. 68).

- **Del título ejecutivo:**

En los términos del artículo 297 del CPACA constituyen título ejecutivo para esta jurisdicción, entre otros documentos, los siguientes:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. *Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)*”

Con relación al contenido del título ejecutivo, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley....”.

A su turno, el Consejo de Estado ha señalado que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (hoy art. 422 del CGP), estableció las condiciones formales y

de fondo que debe reunir el título ejecutivo, las primeras, en el sentido de que los documentos que integran el título conformen una unidad jurídica, es decir, que sean **auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante; **de una sentencia de condena proferida por el juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, **de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia; las segundas, por su parte, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, y que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.²

Bajo las anteriores precisiones, y teniendo en cuenta los documentos aportados por la parte demandante, es pertinente señalar cuáles son los documentos que integran el título ejecutivo, que para el caso que nos ocupa es un título ejecutivo complejo, en la medida que se pretende el cumplimiento de una decisión judicial y el ejecutante actúa en calidad de heredero del beneficiario de la sentencia. Por consiguiente, debe aportarse la primera copia que presta mérito ejecutivo de la respectiva providencia judicial y la copia auténtica de la misma, así como aquellos documentos que contengan la obligación clara, expresa y exigible.

Entonces, cuando se ejecuta con fundamento en un título ejecutivo complejo, es indispensable que todos y cada uno de los documentos que lo conforman, en su conjunto, evidencien la existencia de la obligación con las características previstas en el artículo 422 del CGP, y sean aportados en legal forma para poder librar mandamiento de pago.

En este caso, tenemos que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia condenatoria de primera instancia el 23 de septiembre de 2010, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2009 00231 00, decisión que fue confirmada por el Superior Funcional mediante providencia de 29 de noviembre de 2012 (f. 8-45), y que cobró ejecutoria a partir de las cinco de la tarde (05:00 p. m.) del 12 de febrero de 2013, según constancia secretarial (f. 7), y que indica que todos los documentos son copias auténticas.

También conforman el título ejecutivo complejo, los siguientes documentos:

- Petición radicada ante la UGPP el 19 de noviembre de 2013, por la cual se solicitó el cumplimiento del fallo descrito (fl. 46).
- Copia de la Resolución N° RDP 054476 de 29 de noviembre de 2013, expedida por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, por la cual se reliquidó una pensión de vejez, en cumplimiento de un fallo judicial proferido

² Consejo de Estado, C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja (fls. 50-52)

- Copia de la Resolución N° RDP 0144221 de 05 de abril de 2017, expedida por la UGPP, mediante la cual se modificó el numeral 6 de la Resolución 054476 de 29 de noviembre de 2013 y, en consecuencia, dispuso el pago de la indexación del artículo 178 del CCA y el reconocimiento y pago de intereses moratorios en los términos del artículo 177 *ibídem*, a favor del señor Libardo Alvarado Romero (f. 61-65)
- Copia del cálculo del fallo efectuado por la UGPP.

De lo anterior, se puede extraer que título ejecutivo base de la acción es un título complejo, y que reúne las **condiciones formales** ya señaladas, de conformidad con el artículo 297 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, pues, además de aportarse de manera completa el título que da origen a la obligación, se verifica que la entidad llamada a responder es la **UGPP**.

En este punto, corresponde examinar si los documentos aportados reúnen los requisitos de **fondo**, que hacen relación a la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, en tanto que el mandamiento de pago solo procederá cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda al juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad, su condición de expresa y su exigibilidad.

En ese sentido, la obligación es expresa cuando se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Debe ser clara, en el sentido de que los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) deben estar determinados o, por lo menos, pueden identificarse por la simple revisión del título ejecutivo. Por su parte, la obligación es actualmente exigible cuando no está pendiente de cumplirse un plazo o condición³.

En el caso concreto, los documentos que hacen parte del título ejecutivo indican la existencia de una obligación a favor del ejecutante y a cargo de la UGPP, originada en la sentencia emitida primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 15001 3331 004 2018 00035 00, en el siguiente sentido:

“SEGUNDO: ...la Caja Nacional de Previsión Social debe reliquidar y pagar en debida forma, la pensión de jubilación reconocida a **LUIS ANTONIO ALVARADO ROMERO**, incluyendo los factores

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 54001-23-33-000-2013-00140-01(22065)

salariales...tales como prima de alimentación, prima de navidad, prima semestral y prima de vacaciones

TERCERO. Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social, a título de restablecimiento del derecho, a pagar al demandante, la diferencia de las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 19 de febrero de 2005, cifras que serán indexadas mes a mes, con fundamento en la siguiente formula:

$$R = Rh \times \frac{\text{índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

(...)

CUARTO. La sentencia se cumplirá dentro de los términos previstos en los artículos 176 y 177 del C.C.A, adicionado por el artículo 60 de la ley 446 de 1998 y atendiendo los términos de la sentencia C-188 de 1999 proferida por la Corte Constitucional...”

Además, como se señaló, mediante la Resolución N° RDP 014421 de 05 de abril de 05 de abril de 2017, la UGPP incluyó como parte del cumplimiento del citado fallo el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, y en el ordinal segundo, dispuso:

“...RECONOCER por una sola vez, como Pago Único a Herederos los intereses moratorios causados ordenados (sic.) mediante sentencia proferida por el Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Tunja, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de nulidad 2009-00231, con ocasión del fallecimiento de ALVARADO ROMERO LUIS ANTONIO quien en vida se identificó con la CC. No. 4257610... a los siguientes solicitantes:

ALVARADO ROMERO LIBARDO ya identificado, en porcentaje de 100.00%” (f. 61-65)

Así entonces, se advierte que en la sentencia se imputa a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL, una obligación **clara y expresa**, ya que la referida sentencia, aunque fue proferida en abstracto, es liquidable mediante una operación matemática.

Además, debe señalarse que el artículo 3° del Decreto 2196 de 2009, estableció que una vez se terminara el proceso de liquidación de CAJANAL las funciones de la Entidad serían asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP-.

De igual manera, mediante documento proveniente de la entidad deudora, se reconoció al señor Libardo Alvarado Romero como titular del pago de los intereses moratorios, de acuerdo a lo establecido en la sentencia base de recaudo.

En cuanto a su exigibilidad, es pertinente señalar que el plazo aplicable es el contemplado en el título base de reclamación en los términos del artículo 177 del CCA, el cual prevé que las condenas a entidades estatales serán cumplidas en un plazo máximo de 18 meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. En este orden, teniendo presente que la decisión en mención cobró ejecutoria el 12 de febrero de 2013 (fl. 7), los dieciocho (18) meses de que trata la norma en mención se cumplieron el 12 de agosto de 2014. Por tanto, al momento de presentación de la demanda, esto es, el 25 de septiembre de 2018 (fl. 68) este plazo se encontraba superado, sin que hubiera caducado la acción. Estas razones llevan a colegir que la obligación contenida en el título ejecutivo complejo cumple también con el requisito de ser exigible actualmente.

Corolario de lo expuesto, considera este Juzgado, que de los documentos aportados como base de la presente ejecución, es posible predicar su idoneidad como título ejecutivo, toda vez que reúnen las exigencias contempladas en el art. 422 del CGP., siendo procedente librar el mandamiento de pago solicitado, en tanto que los documentos anexados para el cobro judicial no dejan duda en el juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad.

Del mandamiento de pago

En este contexto, el artículo 430 del Código General del Proceso, establece al respecto:

"ART. 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste merito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal..."

Conforme a la redacción de la norma, el juez debe librar el mandamiento de pago, cuando se acompañe con la demanda, el documento idóneo completo que sirva de fundamento para la ejecución. En ese orden de ideas, se librará el mandamiento de pago, conforme a lo sostenido por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respecto a las opciones que tiene el juez frente a la demanda ejecutiva en los siguientes términos:

"En otras palabras, frente a la demanda ejecutiva el juez tiene tres opciones:
1) Librar mandamiento de pago cuando los documentos aportados con la demanda contienen una obligación clara, expresa y exigible, esto es, constituyen título ejecutivo.

- 2) Negar el mandamiento de pago porque junto con la demanda no se aportó el título.
- 3) Disponer la práctica de las diligencias previas solicitadas en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos legales (art. 489 C. de P.C.), las cuales, una vez cumplidas, conducen al juez a proferir el mandamiento de pago si fueron acreditados los requisitos legales para que exista el título ejecutivo, o negarlo en caso contrario.”⁴

Ahora bien, a efecto de establecer si las sumas señaladas como pretensiones en la demanda, corresponden a los montos adeudados por la entidad, respecto a los cuales es procedente librar mandamiento de pago a favor del señor Libardo Alvarado Romero en contra de la UGPP, atendiendo la condena impuesta en la sentencia dictada dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 33-31-004-2009-00231-00, el Despacho procede a realizar el estudio de los montos reclamados en los siguientes términos:

Como consideración previa se tendrá que el ejecutante no discute la reliquidación hecha por la entidad demandada en la Resolución RDP 055476 de 29 de noviembre de 2013, y lo que reclama es el pago de dineros que se le adeudarían por concepto de intereses moratorios causados entre 13 de febrero y el 12 de agosto de 2013, y entre el 19 de noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014, sobre \$50.520.675 correspondientes a las mesadas atrasadas, hasta la fecha de ejecutoria de la demanda.

Así las cosas, revisada la liquidación efectuada por la parte ejecutante se encuentra que para determinar el valor adeudado, el capital se incrementó mensualmente agregándole la diferencia de las mesadas generadas con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, pero dicha adición no se contempló en las pretensiones, luego, el mandamiento de pago se librará por los intereses moratorios calculados sobre el capital fijo señalado en la demanda, desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, 13 de febrero de 2013, hasta el vencimiento de los seis meses siguientes, 12 de agosto de 2013, y desde el 19 de noviembre de 2013, momento en que se efectuó la solicitud de cumplimiento de la sentencia, hasta el 31 de enero de 2014, fecha de pago de las mesadas atrasadas, de acuerdo al siguiente cuadro:

CAPITAL						\$50.520.675
DESDE	HASTA	TASA DE INTERÉS CORRIENTE BANCARIA	TASA USURA (INTERÉS MORA)	TASA INTERÉS DIARIO	No DÍAS	INTERÉS
13/02/2013	28/02/2013	20,75%	31,13%	0,0753%	16	\$ 608.680
01/03/2013	31/03/2013	20,75%	31,13%	0,0753%	31	\$ 1.179.317
01/04/2013	30/04/2013	20,83%	31,25%	0,0756%	30	\$ 1.145.128
01/05/2013	31/05/2013	20,83%	31,25%	0,0756%	31	\$ 1.183.299
01/06/2013	30/06/2013	20,83%	31,25%	0,0756%	30	\$ 1.145.128

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13103.

01/07/2013	31/07/2013	20,34%	30,51%	0,0740%	31	\$ 1.158.849
01/08/2013	12/08/2013	20,34%	30,51%	0,0740%	12	\$ 448.587
19/11/2013	30/11/2013	19,85%	29,78%	0,0724%	12	\$ 439.069
01/12/2013	31/12/2013	19,85%	29,78%	0,0724%	31	\$ 1.134.262
01/01/2014	31/01/2014	19,65%	29,48%	0,0718%	31	\$ 1.124.186
TOTAL INTERESES MORATORIOS						\$ 9.566.505

Por consiguiente, los intereses moratorios adeudados corresponden a la suma de **nueve millones quinientos sesenta y seis mil quinientos cinco pesos (\$9.566.505)**, suma por la cual se librar  mandamiento de pago.

El referido monto deber  ser indexado a fin de la que suma adeudada conserve su val a al momento del pago efectivo, toda vez que la moneda es objeto de devaluaci n constante y, por ende, se hace necesario el ajuste de su valor, para efectos de garantizar que el valor efectivamente pagado corresponda en algo al que otrora se adeudaba.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Boyac  en sentencia del 6 de julio de 2017, con ponencia del Magistrado Oscar Alfonso Granados Naranjo, refiri ndose a la procedencia de indexaci n respecto de suma adeudada por intereses, se nalo:

“Lo anterior encuentra sustento constitucional en el art culo 230⁵, por considerar la Sala que no es equitativo someter a una devaluaci n de la suma adeudada y de esta forma beneficiar la negligencia de la entidad demandada, de igual forma, es preciso traer a colaci n lo se nalo por el art culo 16 de la Ley 446 de 1998, el cual refiere lo siguiente:

“ARTICULO 16. VALORACI N DE DA OS. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci n de Justicia, la valoraci n de da os irrogados a las personas y a las cosas, atender  los principios de reparaci n integral y equidad y observar  los criterios t cnicos actuariales”

Descendiendo en el caso sub examine, para el efecto, siendo el valor adeudado por intereses moratorios la suma de \$19.948.700,27, la entidad deber  aplicar la f rmula de  ndice inicial (diciembre de 2013-fecha de inclusi n en n mina) sobre  ndice final (junio de 2017 fecha de liquidaci n por esta corporaci n), para tener presente el valor que se adeuda a la fecha, pues el valor a actualizar ser  hasta la fecha de pago efectivo”

⁵ Art culo 230. Los jueces, en sus providencias, s lo est n sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

87

Por lo antes expuesto, el Despacho considera adecuado precisar que la suma adeudada por concepto de intereses, deberá ser indexada entre el 01 de febrero de 2014 y la fecha de su pago efectivo.

Finalmente, respecto de la pretensión de costas, el Despacho se pronunciará en el momento procesal oportuno.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO. - Librar mandamiento de pago a favor del señor **Libardo Alvarado Romero** en contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, por las siguientes sumas de dinero:

- 1. Por la suma de **nueve millones quinientos sesenta y seis mil quinientos cinco pesos (\$9.566.505) M/Cte.**, por concepto de pago de intereses moratorios conforme al artículo 177 del CCA ordenados en la sentencia proferida por este Juzgado el día 23 de septiembre de 2010, y confirmada por el Tribunal de Boyacá con providencia de 29 de noviembre de 2012, dentro del proceso radicado No. 15001 33 31 004 2009 00231 00, desde el 13 de febrero de 2013 día siguiente a la ejecutoria del fallo, al 12 de agosto de 2013, fecha de vencimiento de los seis meses de que trata en inciso 9º de la norma en cita, y desde el 19 de noviembre de 2013, fecha de presentación de la solicitud de cumplimiento del fallo y hasta el 31 de enero de 2014 fecha en que se efectuó el pago de las diferencias de las mesadas pensionales.*
- 2. Dicha suma deberá ser indexada desde el 1 de febrero de 2014, día siguiente al pago de las obligaciones, hasta la fecha en que se realice su pago efectivo.*

SEGUNDO.- Notificar personalmente del contenido de esta providencia al representante legal de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de esta providencia y de la demanda. Póngasele de presente que las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la secretaría del Despacho a su disposición. Hecha la notificación, por Secretaría remítasele de manera inmediata y a través de servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago.

TERCERO.- Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de la presente providencia y de la demanda.

CUARTO. - Notificar del contenido de esta providencia a la parte demandante y a su apoderado de conformidad con el artículo 201 del CPAC.A, esto es, por estado.

QUINTO. - La parte actora deberá sufragar los gastos de notificación, consignando la suma de nueve mil pesos (\$ 9.000.) M/CTE, que corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Envío a través del servicio postal autorizado de copia de la demanda, anexos y esta providencia a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.	\$ 9.000
TOTAL	\$ 9.000

Dicho valor deberá ser consignado en la **cuenta de ahorros No. 4-1503-0-21081-1 del Banco Agrario de la ciudad de Tunja, Convenio N° 13226**, y acreditar su pago ante la Secretaría del Juzgado, dentro de los cinco (05) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Si al vencimiento del plazo previsto en el artículo 178 del CPACA, no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha **desistido** de la demanda y se procederá de conformidad con lo establecido en el precitado artículo.

SEXTO. - Conceder a la parte demandada, el término de cinco (5) días para que dentro de ellos efectúe el pago de la obligación por la cual se le ejecuta, conforme lo señala el artículo 431 del CGP. Dicho término comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

SÉPTIMO. - La parte demandada, cuenta con el término de diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, para proponer excepciones, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 del CGP, se reitera que este término, comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

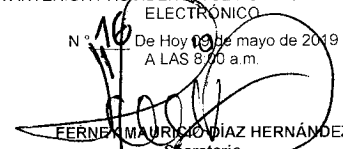
OCTAVO. - Reconocer personería al abogado Ligio Gómez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.079.548 y T.P. N° 52259 C.S.J., como apoderado

especial de la parte ejecutante, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido y que obra a folio 1 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

⁶CZ

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO</p> <p>N.º 16 De Hoy 19 de mayo de 2019 A LAS 8:00 a.m.</p> <p> FERNER MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario</p>
--

⁶ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 09 de mayo de 2019, en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferner Mauricio Díaz Hernández - Secretario